

## LA REFORMA AGRARIA EN VENEZUELA (1)

Por Salvador de la Plaza.

América fue descubierta recientemente, en 1492. Sus regiones del Centro y del Sur las conquistó la Monarquía Española y salvo la resistencia que encontró en México, Guatemala, Perú, en donde la población autóctona había alcanzado un apreciable desarrollo económico y cultural, en el resto de tan extenso territorio fue dominada fácilmente la que se dedicaba a la caza, pesca y a una agricultura rudimentaria. Los capitanes y soldados españoles se apoderaron en nombre del Rey y para el Rey de todas las tierras, minas y riquezas existentes y a los indígenas, no obstante que legalmente, (las Leyes de Indias) se les "debía tener por libres", los sometieron a una explotación exhaustiva, haciéndoles trabajar las tierras y las minas para provecho del Rey y de los "conquistadores". Las tierras fueron distribuidas por el Rey entre estos últimos mediante "repartimientos" o "mercedes", "encomendándoles" la protección de los indios que en ellas moraban. Pero ya a mediados del siglo XVI y debido al aniquilamiento de la población indígena, los "conquistadores" comenzaron a importar esclavos de África, creándose así las bases de la estructura económica que debía prevalecer durante los tres siglos que duró la ocupación española y que heredarían los nuevos países que se independizaron de España tras largas y cruentas guerras en el primer tercio del siglo XIX. Durante la Colonia se desarrolló en Venezuela, en las grandes extensiones de tierra "repartidas" a los "conquistadores", una agricultura de plantaciones a base de la mano de obra de los esclavos negros. Se formaron así las "haciendas", en las que se cultivaba cacao, añil, algodón, tabaco, caña de azúcar, y los

---

(1) Reproducido de "Revue de Droit Contemporain", N° 2, Diciembre 1956, Órgano de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas.

"hatos" dedicados a la cría de ganado vacuno y caballar, temas de tenencia y de relaciones económicas en que se fundamentó una sociedad organizada en castas, formando la superior los propietarios de "haciendas" y "hatos" y los funcionarios representativos del Rey, y entre ésta y los esclavos negros, toda una gama de "libres" que fue integrando el bajo pueblo desde los españoles que se habían alistado como soldados, los civiles que venían a correr fortuna, los indígenas, los hijos y descendientes de las indias violadas o mantenidas como concubinas por los españoles, hasta los hijos de los esclavos negros libertos. Para principios del siglo XIX se estimaba en 800.500 el número de habitantes del 1.400.000 kilómetros cuadrados que tenían de extensión las provincias de la Capitanía General de Venezuela.

Las restricciones impuestas por la Monarquía al libre comercio de estas colonias con el resto del mundo y las pesadas cargas y contribuciones establecidas, fueron generando un violento antagonismo, especialmente desde principios del siglo XVIII, entre los intereses de los "criollos" hacendados y ganaderos y los del gobierno metropolitano. Ese antagonismo alimentaría luego aspiraciones de independencia que fortalecidas por la influencia de las ideas esparcidas por la Revolución Francesa en el mundo, culminarían en el levantamiento de Gual y España, a fines de ese siglo, en cuyo programa figuraban la abolición de la esclavitud, la distribución de tierras entre quienes ninguna poseían y la constitución de una república libre e independiente. No obstante la sangrienta represión, en 1811 los representantes de las provincias reunidos en Caracas, declararon a Venezuela separada de España. En 1821 la Batalla de Carabobo pondría término a la lucha con la derrota definitiva de los ejércitos españoles.

La independencia no transformó la estructura económica. El poder político pasó de manos del Rey de España a las de los "criollos", grandes propietarios de tierras y de esclavos y los "caudillos" que se habían formado en las guerras y que a su vez se convirtieron en grandes propietarios a costa de las tierras confiscadas a los partidarios del Rey.

Sin embargo, y no obstante que la esclavitud fue abolida en 1854, los esclavos habían aprovechado las guerras de indepen-

dencia para libertarse por sí mismos, lo que determinó que los grandes propietarios de tierras se vieran forzados a introducir nuevas relaciones de producción. El esclavo fue sustituido en las "haciendas" por el "medianero" para conservar y extender las plantaciones de cacao, caña de azúcar, café —cultivo éste que había sido introducido a principios de siglo—; por el "aparcero" o arrendatario para procurarse renta con los cultivos menores y por el "peón" —asalariado en condiciones infrahumanas— tanto en las "haciendas" como en los "hatos". El "medianero" era el campesino a quien el gran propietario cedía un lote de tierra para que la deforestara y sembrara de cacao o café, mediante el convenio de que al estar las matas en producción, la mitad de ellas le pertenecerían, pero con la obligación de vendérselas al propietario al exigiéndolo éste. Asimismo, el "medianero" estaba obligado a realizar las labores que se le fijaran y que les eran pagadas con "fichas" sólo cambiables en la "pulpería" o "tienda de raya" del fundo en cuestión. Además y como esos salarios no le alcanzaban para su sustento y el de su familia, el "medianero" solicitaba anticipos en la "pulpería" a cuenta de las matas sembradas, deudas que se heredaban de padres a hijos y que mientras no las pagaran no podían ausentarse del fundo, trasladarse a otros lugares. La introducción de esa nueva forma de relaciones de producción no sólo aseguró a los grandes propietarios de tierras una mayor explotación del campesinado, sino ampliar la extensión de sus fundos y de los cultivos y aumentar la producción. La del café pasó de Kls. 3.600.000 en 1830 a 12.000.000 en 1840 y a 38.500.000 en 1900. La del cacao de 2.200.000 en 1830 a 3.000.000 en 1840 y a 8.600.000 en 1900. Las exportaciones de ganado vacuno aumentaron de 1.500 reses en 1830 a 11.641 en 1840 y a 44.164 en 1900.

Las tierras que no estaban cultivadas con plantaciones, eran arrendadas a "aparceros", pequeños productores de cereales, tubérculos, etc., mediante el pago de una renta en especie equivalente al 1/4, la 1/2 o el 1/3 de las cosechas, según las regiones o si el propietario de la tierra suministraba las semillas o las bestias de labor.

Ese sistema de grandes propiedades —latifundios— determinó el que se constituyeran sus propietarios en "caciques" —jefes po-

líticos— regionales, muy similares en algunos aspectos a los señores Feudales, ya que por las relaciones de producción descritas y el enfeudamiento de las deudas, "medianeros", "aparceros" "peones" y sus familias dependían de ellos económica y políticamente, incluso sus vidas. Ese sistema determinó también de una parte la diseminación de la población rural, la que para escapar a esas condiciones de explotación y disponer de tierras donde trabajar sin pagar renta, fue internándose en las más alejadas montañas, aisladas unas familias de otras por kilómetros de distancia y, por otra parte, que los campesinos fueran reclutados o enrolados voluntariamente en los cuerpos de ejércitos con que se sostenía la guerra entre sí los grandes propietarios para la conquista del poder político local o nacional. Bajo tales condiciones era imposible la instauración de prácticas democráticas, la atención educativa sanitaria a la población.

Las estadísticas de exportaciones e importaciones durante ese período sirven de índice aproximado del desarrollo económico nacional. Entre 1830 y 1900 las exportaciones e importaciones totales pasaron, respectivamente, de Bs. 8.600.000 y 8.200.000 a Bs. 79.700.000 y Bs. 55.900.000, es decir, que en esos 70 años el reducido aumento de la producción agropecuaria no había permitido la necesaria acumulación de capital como para impulsar el desarrollo industrial. La población había apenas aumentado, por otra parte, de los 800.500 habitantes a principios de siglo, a 2.325.527 en 1900, población que se descomponía en 1.800.000 rural, que vivía diseminada en poblados menores de 1.000 habitantes y, 523.527 urbana y semi-urbana.

En 1937 se realizan los primeros Censos Agropecuarios en el país, pero si tomamos en cuenta la lentitud del proceso general del país, sus resultados pueden aceptarse como expresión de la situación prevaleciente desde fines del siglo pasado. Esos Censos nos dicen que de los 90 millones de hectáreas de la extensión total del país —Venezuela perdió en una rectificación de fronteras con Colombia 300.000 kms. 2—, estaban apropiadas por particulares 23.219.924 Has., de las cuales 19.928.849 dedicadas a la cría y 3.291.924 a la agricultura y de éstas cultivadas solo



708.773; otra de las funestas consecuencias del régimen de la gran propiedad: ociosidad en que se mantiene a la tierra mientras millares de campesinos que podrían cultivarla carecen de ella.

Dado que desde la Colonia la extensión de territorio más densamente habitada y apropiada fue la llamada Zona Centro-Cos-tera, nos referimos a los resultados del Censo en ella por estimar que expresan la verdadera situación del agro venezolano, ya que en sus 7.683.000 de hectáreas, el 8,5% de la extensión total del país, vivían 1.865.126 personas, el 53% de la población total (Censo de población 1936). De esa extensión estaban apropiadas 3.284.193 (fundos agrícolas y pecuarios), es decir, el 42%. En algunos Estados de esa zona el porcentaje de apropiación llegaba al 80% y al 100%, los más próximos a la capital de la República. Concretando tendremos que de 2.341.902 de esas hectáreas apropiadas, 1.829.628 estaban acaparadas por 1.320 propietarios de más de 150 Has. y las restantes 512.274, el 22%, por 34.570 propietarios de menos de 150 Has. La población rural se calculaba en 687.091 habitantes, por lo que mientras 35.890 propietarios acaparaban 2.341.902 Has., 651.201 campesinos no poseían ninguna tierra.

Ese acaparamiento era aún más violento en el Estado Miranda, que circunda al Distrito capital. De su extensión territorial —795.000 Has.—, estaba apropiado el 82% y de ellas 557.516 por sólo 406 propietarios de más de 150 Has., mientras 2.897 propietarios de menos de 150 Has. poseían 94.537 y 165.135 campesinos no tenían ninguna tierra.

De esos mismos Censos se desprende que la población activa agropecuaria de todo el país —605.353— se descomponía así: 80.154 propietarios; 185.069 "medianeros"; 311.414 asalariados; 8.921 empleados de haciendas y hatos, y 19.795 indefinidos; cifras éstas que con las anteriormente dadas completan el cuadro del régimen de explotación que pesaba sobre el campesinado y maniató el desarrollo económico del país y la estabilización de una convivencia social y política democrática.

Otros factores contribuyeron a sostener y mantener esa estructura económica atrasada. A mediados del siglo pasado se

establecieron en el país firmas comerciales extranjeras, especialmente alemanas, que se dedicaron a monopolizar las exportaciones de café, cacao y ganado vacuno y la importación de artículos manufacturados, sirviendo al mismo tiempo de banqueros a los grandes propietarios de tierra, a quienes anticipaban dinero o artículos importados para el suministro de sus haciendas y hatos a cuenta de las cosechas, las que les pagaban por debajo del precio del mercado internacional y les cargaban los artículos a precios altísimos, percibiendo con ese negocio de usura grandes beneficios que exportaban a sus países de origen. Esos consorcios comerciales fueron los iniciadores de la clase de los comerciantes "compradores" que en los países sub-desarrollados han servido de principales agentes del imperialismo para su penetración y para la succión de sus riquezas.

Los trusts petroleros ingleses y yanquis, para lograr las mejores concesiones de petróleo, apoyaron también a los grandes propietarios de tierra y al gobierno tiránico que les servía de expresión política y se valieron de unos y otro y de los comerciantes "compradores" para organizar el saqueo del país e impedir su desarrollo económico independiente. La explotación comercial del petróleo comenzó en 1916 y en ese año, mientras se exportaron productos agropecuarios por valor de Bs. 108.000.000, se importaron artículos manufacturados y alimentos por valor de Bs. 90.557.963. Diez años después las exportaciones de productos agropecuarios habían aumentado a sólo Bs. 144.636.789, mientras las importaciones de artículos manufacturados y alimentos habían ascendido a Bs. 358.458.313, originándose un saldo en contra en la Balanza Comercial de Bs. 214 millones, saldo que en lo adelante aumentaría aceleradamente y que en 1958 alcanzaría a la astronómica cifra de Bs. 4.487 millones, de los cuales Bs. 567 millones en sólo alimentos que bien se hubieran podido producir en el país. A diferencia de otros países sub-desarrollados, en los que esos saldos desfavorables se reflejan en la depreciación de su moneda y en las aplastantes deudas que contraen en el exterior, Venezuela los ha cubierto con lo que percibe por royalty, impuesto sobre la renta y otros impuestos que pagan las compañías petroleras, las que no sólo arruinan a Venezuela por el agotamiento

de sus pozos —materia prima no renovable— sino también con la succión del producto del trabajo de su población que exportan en forma de dividendos, pago de servicios, reexportación de capitales, etc.

La Segunda Guerra Mundial descorrió el velo que ocultaba esta realidad. La escasez de barcos ocasionó una considerable disminución en la importación de alimentos, lo que significó el peligro de hambre si la guerra continuaba, dada lo reducido de la producción nacional de los mismos. Con el objeto de prevenir ese peligro, sectores de las clases gobernantes se hicieron eco de la tradicional consigna del campesinado por la cual había luchado y derramado su sangre: la redistribución de tierras entre quienes la trabajen. En efecto, en septiembre de 1945 fue promulgada por el Congreso Nacional una Ley de Reforma Agraria que si bien reconocía a los campesinos el derecho a ser dotados de tierra, condicionaba el ejercicio de ese derecho dentro de límites tan moderados, que la transformación de la estructura agraria de operarse, lo sería con suma lentitud. Sin embargo, los trusts imperialistas yanquis vieron en esa Ley una amenaza a sus intereses, ya que no obstante su moderación, reforzaría el movimiento nacionalista que estaba creciendo y había logrado algunas conquistas, tales como la Ley de Hidrocarburos de 1943, la cual al obligar a las compañías petroleras a pagar impuesto sobre la renta, incrementó la participación de la Nación en la explotación de su petróleo y, como consecuencia, redujo los super-beneficios que los trusts succionan al país. Para impedir que esa Ley entrara en vigencia, organizaron, con la complicidad de un grupo de oficiales y de algunos líderes del Partido Acción Democrática, un golpe de estado para derrocar al Gobierno, el que tuvo lugar el 18 de octubre de 1945. El Gobierno de facto, producto de ese golpe, derogó la Ley Agraria. En 1948 el Congreso elegido en 1947 promulgó otra Ley Agraria, pero en la que fue sustituido el derecho de los campesinos a ser dotados de tierra en propiedad, por el goce de ella en usufructo y la organización de unas Comunidades Agrarias con las cuales se interpretaba el lema "dotar de hombres a la tierra", ya que el problema de Venezuela no consistía en transformar la estructura agraria, sino en aumentar la

producción. Un nuevo golpe militar derrocó al Gobierno constituido, derogó la Ley Agraria y sumió al país en la tenebrosa tiranía de Pérez Jiménez hasta el 23 de enero de 1958.

Durante los años de esa tiranía el impacto de la alianza de los trusts imperialistas con los grandes propietarios de tierra y los comerciantes "compradores" sobre la economía nacional provocó, entre otras graves consecuencias, la emigración en masa del campesinado hacia las ciudades, en donde por no poder ser absorbida por la industria, cuyo desarrollo obstaculiza el mismo imperialismo, se convirtió en población flotante proclive a radicalizarse a medida que su situación se hace más difícil. La participación de esa masa en los sucesos del 23 de enero de 1958, en el recibimiento a Nixon, en los posteriores de julio y septiembre de ese mismo año, advirtió que a la caótica situación económica había que buscarle soluciones nacionales.

La Reforma Agraria se encuentra entre esas soluciones. No se trata sólo de satisfacer la reivindicación campesina de mejores condiciones de vida, sino de incorporar al campesinado en su conjunto al proceso de la producción y por medio de esa incorporación impulsar el desarrollo industrial nacional. Acoplar la producción agropecuaria con la industrial, se traducirá en crear las bases para la liberación del país del control y de la dependencia en que lo mantiene el imperialismo. Reforma Agraria ésta cuya realización deberá ser obra de los mismos campesinos unidos estrechamente a la clase obrera y en alianza con los sectores de la pequeña burguesía y de los de la burguesía industrial nacional que comienzan a comprender que para su propio desarrollo tienen que luchar también contra el imperialismo.

A mediados de 1958 la Junta de Gobierno designó una Comisión que debía redactar un anteproyecto de Ley Agraria. No obstante la composición heterogénea de esa Comisión, el anteproyecto que elaboró y que ha sido introducido al Gobierno Nacional para su discusión y promulgación, contiene lineamientos generales para una reforma integral. En ese resultado ha influido la agudeza a que han llegado las contradicciones entre la nacional —en sus aspectos económico y político— y la penetración

imperialista: la alarmante disminución de la producción agropecuaria —cereales, verduras, leche, carne, huevos, etc.—, las exorbitantes importaciones de alimentos y el consiguiente escape de divisas al exterior, el éxodo campesino hacia las ciudades, el fracaso de los planes de emergencia empleados como paliativos para debilitar la presión de esa masa sobre la solución de problemas económicos y políticos, las crecientes necesidades de la naciente industria, etc. Todo ese conjunto de problemas candentes estuvieron presentes en las deliberaciones de la Comisión Agraria, al punto de que hizo menos intolerante la resistencia de los representantes de los grandes propietarios de tierra.

El anteproyecto de Ley está integrado en dos Libros, dedicado el primero a los principios generales, y el Segundo, a los órganos y medios de ejecución de la Reforma Agraria, dividido el primero en un Título Preliminar —Bases de la Reforma Agraria— y 8 Títulos con sus correspondientes Capítulos y Secciones: Título I, De la Propiedad Agrícola; Título II, De las Dotaciones; Título III, Del Crédito Agrícola; Título IV, De la Conservación y Fomento de los Recursos Naturales; Título V, De la Organización del Mercado de los Productos Agrícolas; Título VI, De la Vivienda Rural; Título VII, De las Cooperativas Agrícolas; Título VIII, De la Regulación de los Contratos Agrícolas. El Segundo Libro a su vez está dividido en 4 Títulos con sus respectivos Capítulos y Secciones: I, De los Órganos de la Reforma Agraria; II, De los Medios de Ejecución; de la Deuda Agraria y de las Obras de Riego; III, Disposiciones Transitorias, y IV Disposiciones Finales.

De esta enumeración es fácil colegir que la Comisión Agraria se abocó a integrar en un solo cuerpo de Ley las disposiciones conducentes a la solución de los diversos y variados problemas de la transformación de la estructura agraria y de la creación de una nueva que al liberar las fuerzas productivas en el campo, sirviera de impulsora al desarrollo nacional y sacara al país de su situación actual de sub-desarrollado. El anteproyecto fincó su objetivo en el hombre, pero no en el hombre aislado, el campesino indefenso, sino en el hombre activo en la sociedad y para actuar en la construcción de la economía general del país. Se



ha criticado a este anteproyecto su extensión, aduciendo que muchos de sus títulos y disposiciones deberían ser objeto de otras leyes. Se consideró, por el contrario, que por deber propender la Ley Agraria a una reforma integral, debía comprender en su texto todas las disposiciones atinentes a ese objetivo, el que muy concretamente se precisa en su Título Preliminar —Bases de la Reforma Agraria—, especialmente en el artículo 1º:

“La presente Ley tiene por objeto la transformación de la  
 “estructura agraria del país y la incorporación de su pobla-  
 “ción rural al desarrollo económico, social y político de la  
 “Nación, mediante un sistema justo de propiedad, tenencia  
 “y explotación de la tierra, basado en la equitativa distribu-  
 “ción de la misma, la adecuada organización del crédito y  
 “la asistencia integral para los productores del campo, a fin  
 “de que la tierra constituya para el hombre que la trabaja,  
 “base de su estabilidad económica, fundamento de su pro-  
 “gresivo bienestar social y garantía de su libertad y dig-  
 “nidad”.

¿Cómo transformar la estructura agraria atrasada, que como hemos visto, se caracteriza por la pervivencia del sistema de la gran propiedad heredada de la Colonia —el latifundio— y de las relaciones de producción que le son congénitas? La Comisión Agraria adoptó sustituir la propiedad latifundista por la pequeña y mediana propiedad familiar y la progresiva explotación de las parcelas en cooperativas (aparte d, (e), del artículo 2) (2), mediante la dotación a los campesinos de tierra en propiedad preferentemente en los lugares donde estuvieren ubicados (aparte b), (-6-) del artículo 2) (2), es decir, en los mismos latifundios que tendrán que ser fraccionados, organizando a los grupos campesinos así dotados en unidades económicas, sociales y políticas (artículo 63) (68). Pero como la sola dotación de tierra no resuelve el problema, se garantiza a los pequeños y medianos productores el derecho a ser asistidos por el Estado con los créditos necesarios para su producción y desarrollo (artículo 117) (109), así como de los servicios para el almacenaje, la conservación y distribución en el mercado de sus productos (artículo 137) (128).

De los 90 millones de hectáreas que el país tiene de extensión territorial, como hemos visto, sólo 23 millones estaban apropiadas, es decir, que existen regiones o zonas aptas para ser explotadas que permanecen al margen de la producción. El Estado deberá proceder a elaborar los respectivos planes para el desarrollo de esas regiones (artículo 4) (4), pero el asentamiento de campesinos en esas tierras incorporadas, tendrá que ser a voluntad de ellos (artículo 91) (88), incluso cuando se trate de reubicación de grupos por insalubridad del lugar o por lejanía del mismo de los mercados. En el anteproyecto está excluida, proscrita, toda tendencia a emplear sistemas de colonización para proveer de mano de obra a los terratenientes ricos o en camino de serlo.

Los extranjeros gozarán de los mismos derechos de los venezolanos en lo que respecta a los beneficios y obligaciones de la Ley Agraria (artículo 8) (8).

El anteproyecto divide las tierras en tierras de entidades públicas y tierras privadas. Las primeras (las de la Nación, las baldías, de los Estados, Municipalidades, Institutos, etc.), quedan afectadas por la Ley a los fines de la Reforma Agraria y por tanto, con ellas serán dotados los individuos o grupos campesinos, con la excepción de aquéllas que estén destinadas al dominio público, a la conservación de recursos naturales (Parque Nacionales, etc.). (Artículos 9 al 17) (10 al 18).

Con respecto a las segundas, salvo las que estén cumpliendo con la función social de la propiedad, las demás también son afectadas por la Ley a los fines de la Reforma Agraria, es decir, que con ellas se dotará a los campesinos adquiriéndolas el Estado, ya por compra o por expropiación. Cumplen con la función social los fundos en los que se reúnan todas las siguientes condiciones: que estén eficientemente explotados; que estén trabajados directamente por sus dueños o dirigida la explotación por ellos y hayan asumido la responsabilidad financiera de la explotación; que se cumplan los preceptos de la Ley del Trabajo y las disposiciones sobre conservación de recursos naturales (artículo 18) (19). La Ley garantiza la explotación capitalista en el campo, no limita la extensión de los fundos que cumplan con la función social, una

de las deficiencias del anteproyecto. Pero todas las tierras de propiedad particular que se encuentren ociosas, no cultivadas o explotadas por medio de medianeros, aparceros, pisatarios, serán adquiridas o expropiadas cuando sean objeto de una solicitud de dotación (artículo 22) (22), pudiéndose reservar los dueños una porción de 150 Has. (la reserva), que se considera inexpropiable, pero teniéndola que cultivar so-pena de perder esa ventaja (artículos 29-35) (29-32). El pago de las tierras compradas o expropiadas por el Estado se hará mediante bonos de una Deuda Agraria que al efecto será creada a cargo del Instituto Agrario Nacional (artículo 199) (172). Esa Deuda constará de tres clases de bonos: a) con vencimiento de veinte años e interés anual del 4%, destinados a pagar las expropiadas; b) con vencimiento de quince años e interés del 5%, para pagar las tierras vendidas voluntariamente por sus dueños, y c) con vencimiento de diez años e interés al 6% para ser colocados en el mercado como medio de arbitrar fondos para la realización de la Reforma Agraria (artículo 200) (173). Pero los pagos no se harán en su totalidad con esos bonos, sino en porcentaje con relación al precio de las tierras. Las que tuvieren precios menores a los Bs. 100.000, pago íntegro en efectivo; entre 100.000 y 250.000, el 40% en efectivo y el 60% en bonos; entre 250.000 y 500.000, el 30% en efectivo y el 70% en bonos; entre 500.000 y 1.000.000, el 20% en efectivo y 80% en bonos, y las de más de 1.000.000, el 10% en efectivo y 90% en bonos (artículo 205) (178). Se establecen reglas especiales para los avalúos, así como el procedimiento de la expropiación se aligera y simplifica a fin de reducir los términos.

El anteproyecto garantiza el derecho del individuo o grupo a ser dotado de tierras, pero dedica su principal atención a la dotación de los grupos, con el objeto de propender a la concentración de la población diseminada, hacer más accesible los servicios sanitarios, educacionales, etc., a los campesinos y más eficiente su producción. De aquí que las dotaciones comprenderán a más de las tierras destinadas a las parcelas, la necesaria para la erección del Centro Poblado, su futuro ensanche, construcción de edificios de uso común de los parceleros (Casa Municipal, escuela, galpones para máquinas, parques infantiles, etc.), para el

potrero comunal, así como también los montes y aguas indispensables (artículo 62) (57). Como parte de la dotación se incluye la asistencia técnica y financiera (servicio de crédito) a los parceleros. Los Centros Poblados se denominarán Centros Agrarios si las dotaciones se realizan en los lugares mismos donde están ubicados los campesinos y Unidades Agrícolas, cuando la dotación se haga en zona incorporada a la producción, en las reubicaciones de campesinos. En los primeros la administración estará a cargo de un Comité Administrativo elegido por los mismos parceleros, de entre ellos en Asamblea General, asesorado por un Director Técnico designado por el Instituto de la Reforma Agraria. En las Unidades Agrícolas la administración la ejercerá un Director Técnico asistido por el Comité Administrativo elegido por los parceleros (artículo 64) (58-59).

Las parcelas serán adjudicadas en venta o gratuitamente, pero en ambos casos en propiedad (artículo 66) (61). Además de la tierra, cuyo precio será el de su costo de adquisición, la parcela comprenderá la casa, las mejoras (vaquera, porqueriza, etc.), los gastos de financiamiento de la producción durante el primer año que deberán ser suplididos por el Instituto (artículo 67) (65). El pago se hará en cuotas anuales con plazo no menor de 20 años ni mayor de 30, y las cuotas se comenzarán a pagar a partir del tercer año de haber recibido el parcelero el título provisional, es decir, a los 4 años de haber recibido la tierra (artículo 68) (66). Por otra parte, no se pagarán intereses y se establece que el saldo de la deuda será reducido mediante porcentajes según el número de hijos que tenga el parcelero, asistencia escolar, capacitación técnica, empleo de métodos para aumentar la producción, etc., reducciones que tienen por fin estimular la culturización de la población y el mejor aprovechamiento de las parcelas (artículo 81) (78).

Con el fin de evitar nuevas concentraciones de tierra en pocas manos, cada parcelero no podrá poseer más de una parcela y los trasposos sólo podrán hacerse a personas que reúnan las condiciones de aptitud para ser parceleros, no podrán ser dadas en arrendamiento, y para garantizar créditos sólo se podrá constituir prenda agraria o industrial (artículo 76) (74). Las parcelas serán

inembargables a fin de proteger a los parceleros contra presta mistas usureros o comerciantes inescrupulosos.

La extensión de las parcelas no se fija en la Ley. Dependerá de las condiciones agrológicas del terreno a distribuir y deberá ser suficiente como para que el parcelero con su trabajo y el de su familia alcance una producción que cubra sus necesidades y excedentes que vender en el mercado (artículo 79) (76). La subdivisión de las parcelas está prohibida. En caso de fallecimiento del parcelero, si los herederos optan por la partición, el Instituto declarará la extinción de la adjudicación y pondrá a la orden de la sucesión el monto de las amortizaciones pagadas más el valor estimado de las mejoras introducidas por el difunto (artículo 75) (72). De esta manera se evita la creación de minifundios.

Tendrán siempre prelación en las adjudicaciones de parcelas los pisatarios, medianeros, aparceros, ocupantes que estén cultivando o hayan cultivado las tierras objeto de la parcelación (artículo 70) (68).

El procedimiento para las dotaciones es sencillo: el individuo o grupo apto, es decir, que se comprometa a trabajar la parcela personalmente, que carezca de tierra o sea insuficiente la que posea y sea mayor de 18 años, presentará su solicitud al Instituto, el que estará obligado a resolver en tiempo prudencial y proceder a la dotación (artículo 97 y sgs.) (93). Si en la localidad no existen tierras de entidades públicas (baldías, bienes rústicos de la Nación, etc.), el Instituto deberá proceder a adquirir las de particulares en la misma zona (artículo 72) (70).

Como se anotó anteriormente, el servicio de crédito se considera de utilidad pública y por tanto el Estado está obligado a organizarlo especialmente en beneficio de los pequeños y medianos productores (artículos 117 a 127) (109 a 118). Asimismo se considera de interés público en beneficio de productores y consumidores la organización de los servicios de almacenaje, conservación, transporte y distribución de los productos agropecuarios. El Estado deberá también organizar el suministro de máquinas implementos, etc., a los pequeños productores (artículo 137) (18). El



Banco de Crédito estará obligado a recibir los productos de los parceleros en pago de créditos (artículo 139) (120), así como a garantizar precios mínimos a los productos, previa clasificación y tipificación de los mismos (artículo 140) (131). Deberá organizar "estaciones de máquina", plantas de beneficio, almacenes en cada Centro Poblado (artículo 83) (79). Fomentará la constitución de cooperativas tanto de producción como de consumo, así como para la adquisición de máquinas, etc. (artículo 148) (137).

Dado lo arbitrario del sistema pluvial que rige en el país, grandes sequías seguidas de grandes inundaciones, de la escasez de tierras húmedas, el anteproyecto da mucha importancia al riego, al uso y aprovechamiento de las aguas. Se establecen disposiciones para la construcción de grandes y pequeñas obras de riego en beneficio de los sujetos de la Reforma Agraria (artículos 207-20) (180 - 189).

Para la realización de la Reforma Agraria se creará un Instituto, con organización nacional, encargado de atender las solicitudes de tierra y llevar a cabo las dotaciones y asentamiento de los campesinos y en general, la realización de todos los planes de construcciones de producción, de ayuda técnica, etc., que sean necesarios.

El Instituto dispondrá para cumplir su cometido no sólo de las tierras nacionales que les serán transferidas y de las privadas que adquiera por compra o expropiación, sino de los recursos financieros que deberá suministrar el Ejecutivo Nacional a través del Presupuesto Nacional y los que el mismo Instituto obtenga con la colocación de los bonos clase C) de la Deuda Agraria ya citados.

Uno de los miembros del Directorio del Instituto deberá ser designado de una terna que presentará al Ejecutivo Nacional la Organización Campesina Nacional.

Estos aspectos generales permiten apreciar que el campesinado, la clase obrera y las fuerzas progresistas de Venezuela dispondrán de un instrumento legal susceptible de ser aprovechado para organizar la lucha por mejores condiciones de vida para las clases explotadas de las ciudades y campos; la lucha por la trans-

formación de país sub-desarrollado en país con economía propia e independiente; la lucha contra la penetración y dependencia en que lo mantiene el imperialismo, especialmente el yanqui, aliado con las fuerzas criollas más reaccionarias. Pero una Ley no pasa de ser un instrumento y dependerá de como y de quien lo use el que rinda provecho a la colectividad. Los campesinos y obreros venezolanos tienen ya la experiencia dolorosa de épocas pasadas y la madurez política necesaria para encabezar esas luchas y conducir las al triunfo.

Caracas, septiembre, 1959.